

Iquique, veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña **GABRIELA PATRICIA HIDALGO EGUINO**, abogada, en representación de don **CRISTIAN RAMON RAMIREZ ABE**, empleado, y doña **JEISSY EDITH MATURANA ROMO**, labores de casa, todos con domicilio en Avenida La Tirana N° 1924 de la comuna de Iquique; quienes interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de la empresa **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada por su gerente don CHRISTIAN BARAHONA RUBIO, ambos domiciliados en calle Esmeralda N°340, Iquique.

Expone que sus representados están casados en sociedad conyugal y son dueños del sitio N° 39 de la Manzana E de la Población Ampliación Nueva Victoria de la comuna de Iquique, que se ubica en Av. La Tirana N°1924, Iquique, lugar donde se emplaza su vivienda, y que el día 2 diciembre de 2018, a las 05:00 horas aproximadamente, tomaron conocimiento que se estaba produciendo una fuga de agua hace un par de horas, proveniente de la matriz de agua potable ubicada fuera de su propiedad, derramándose gran cantidad de agua de manera subterránea hacia el interior de la vivienda, por lo cual tomaron contacto con Aguas del Altiplano, quienes realizaron la reparación correspondiente, quedando signada dicha actuación con el número CAS-562908. Horas más tarde se percataron que había un descuadre del portón y reja de acceso al primer piso de su casa, y que una parte del terreno estaba hundida, con visibles grietas horizontales en las paredes internas del estacionamiento, por lo que nuevamente se intentaron contactar en 2



oportunidades con la empresa de agua (CAS-562923 y CAS-563029), sin recibir solución.

Agrega que el 3 de diciembre de 2018 reiteraron requerimientos a la demandada, quedando signados con los números de caso: 563279, 563297, 564939, 565115 y 584721, y luego, el 6 de diciembre del mismo año, acudió a las oficinas de Aguas del Altiplano para exponer lo sucedido. Hace presente que un supervisor de la empresa aludida visitó la propiedad, sin dar solución a los daños. Así, el día 28 de diciembre de 2018, presentaron un reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entidad que a través del Ordinario N°284/2019 les respondió, en síntesis, que carece de facultades para hacerse parte de contiendas por daños a la propiedad, pero que la mantención, operación y renovación del arranque de agua potable corresponde a una responsabilidad de la empresa, así como los efectos de las fallas que ello provoque a terceros.

Refiere que en febrero de 2019 encargaron un peritaje a un arquitecto, el que presentó como conclusión, entre otras: “[...] *la gran mayoría de los daños observados, se han generado en forma directa e indirecta, por los asentamientos que ocurrieron por la acción del agua y las reparaciones que se hicieron para detener dicha filtración [...]*”. El día 19 del mes y año indicado consultaron nuevamente a la demandada por su situación, recibiendo respuesta negativa a su solicitud, ya que los hechos tienen un origen ajeno a la responsabilidad de Aguas del Altiplano.

Luego, señala que producto de una visita al inmueble de sus representados por parte de personal de la I. Municipalidad de Iquique, se emitió Resolución N°214/2019, de fecha 6 de junio de 2019, mediante la cual la propiedad fue declarada inhabitable parcialmente.

En cuanto a los perjuicios demandados solicita: A) Daño Emergente, correspondiente a gastos incurridos en la reparación de la propiedad, relativos al piso 1 y antejardín, los que detalla en cuadro adjunto, y que valoriza bajo el



título “Presupuesto de Obras”, la que contempla 4 etapas pormenorizadas en 4 tablas, finalizando con cuadro que indica el total a enero de 2019 por la suma de \$13.261.360 y un total con reajuste I.P.C. a septiembre de 2022 por la suma de \$16.684.317; y B) Daño Moral, que atribuyen al menoscabo psíquico emocional grave que ha sufrido el grupo familiar, debido al agobio y preocupación diaria que implica reparar el lugar donde viven, y que cuantifican en la suma de \$30.000.000. Así, el total de los perjuicios demandados asciende a la suma de \$46.684.317.

Como fundamento de Derecho, alude a la existencia de una relación contractual con la empresa de servicios sanitarios, celebrada y perfeccionada con los usuarios desde la respectiva certificación de instalación de agua potable y alcantarillado, según dispone el artículo 92 del DS N°1199 de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de tales servicios. Cita los artículos 1545, 1546, 1553 y 1556 del Código Civil, para luego referir que Aguas del Altiplano se encontraba obligado a poner a disposición un servicio de consumo básico, con diligencia y sin menoscabo a la propiedad de los actores, lo cual incumplió, por lo que resulta procedente condenarla al pago de una indemnización de perjuicios como reparación al incumplimiento contractual en que ha incurrido.

En lo que respecta a la culpa, cita los artículos 1547 y 44 del Código de Bello para indicar que el contrato aludido, al generar beneficios recíprocos para ambas partes, la demandada deberá responder de culpa leve, la cual se presume, por lo que corresponde a la demanda acreditar que ha empleado la debida diligencia en el cumplimiento del contrato, lo que no ha ocurrido en la especie.

Por su parte, en lo relativo a la existencia de perjuicios, reitera que el incumplimiento que achaca a la demandada, le generó un importante perjuicio



moral a sus representados, manifestando además que pese a las variadas interpretaciones acerca de la reparación del daño moral causado en sede contractual, actualmente la doctrina y jurisprudencia han aceptado su procedencia conforme el principio general de que todo daño debe ser íntegramente reparado. Es así, que solicita se condene a Aguas del Altiplano a pagar una indemnización de perjuicios por un monto que las víctimas avalúan en \$30.000.000.

En cuanto a la relación de causalidad, sostiene que es precisamente el incumplimiento contractual de la empresa de aguas, lo que provoca los perjuicios sufridos por sus representados, constituyendo el actuar negligente de la demandada causa suficiente del daño cuya reparación se pretende. Refiere además que no concurre causal de exención de responsabilidad del deudor, tal como caso fortuito, fuerza mayor, ausencia de culpa, estado de necesidad, imprevisión o cláusulas modificatorias de responsabilidad.

Finalmente, respecto a la mora sostiene que resulta aplicable lo dispuesto en el N°2 del artículo 1551 del Código Civil, puesto que las obligaciones incumplidas de Aguas de Altiplano debieron ejecutarse en un espacio de tiempo determinado, lo que no ocurrió. Sin embargo, agrega que en cualquier caso debe entenderse que la demandada se encuentra constituida en mora en los términos de citado artículo 1551, pues ha sido reconvenida en el presente juicio.

En atención a lo expuesto, solicita al tribunal, en definitiva, que: 1) Se acoja la demanda, condenando a la demandada al pago de la suma de \$46.684.317, por los conceptos indemnizatorios detallados, o la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar; 2) Que la indemnización sea reajustada de acuerdo a las variaciones del I.P.C. desde la fecha en que ocurrieron los hechos ilícitos, hasta el pago efectivo; 3) Que se apliquen los intereses corrientes y reajustes desde la fecha de ocurridos los hechos ilícitos, hasta el pago efectivo; 4) Que la demandada sea condenada en costas.



En subsidio, interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Aguas del Altiplano, ya individualizada.

En virtud del principio de economía procesal, solicita se tengan por reiterados todos y cada uno de los antecedentes de hecho ya detallados. Señala que la presente demanda se fundamenta en la responsabilidad de la demandada en los hechos acaecidos que constituyen un ilícito civil, pues el daño provocado al inmueble fue provocado por la ruptura de una matriz que forma parte de la empresa demandada, que se encuentra extendida a lo largo de Avenida La Tirana, al altura de la vivienda singularizada.

Cita los artículos 2314, 2284 y 2316 del Código Civil para indicar que de dicha normativa se deducen los elementos que componen la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual.

En primer lugar, se refiere a que el hecho provenga de culpa o dolo. Al respecto, acusa culpabilidad en la conducta de la demandada, tanto antes, durante y ya verificada la filtración. Indica que antes de la filtración de agua ocurrida el 2 de diciembre de 2018, en dos oportunidades hubo rotura de matriz en el mismo sector donde se emplaza su propiedad, sin que la empresa se hiciera cargo de los daños provocados a las propiedades afectadas. Cuenta que el 29 de enero de 2018 hubo una descarga de agua con afloramiento en la vivienda, filtrándose agua en los muros internos de las paredes del estacionamiento de su propiedad (CAS-160725), y al día siguiente, al romperse la matriz de agua, hubo una fuga de agua potable en la vía pública y privada que se encuentra en las afueras de su propiedad. Asimismo, relata que el 3 de octubre de 2017 hubo una obstrucción en el colector del alcantarillado, lo que también produjo fuga de agua de la misma matriz y, por ende, filtración de agua en su propiedad.

Sostiene que la falta de mantenimiento de las tuberías averiadas, que produjeron las filtraciones de agua debajo del inmueble, son imputables a culpa



infraccional de la empresa demandada, lo que fundamenta en los artículos 34 y 36 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 382, “Ley General de Servicios Sanitarios”, y los artículos 91 y 122 el Reglamento de Concesiones Sanitarias de producción y distribución de agua potable, normas que cita.

Durante la filtración, señala que la demandada, pese a estar en conocimiento de la ruptura de matriz, así como también de las 3 filtraciones ocurridas anteriormente, demoró más de 6 horas en realizar la reparación, sin resarcir los daños producidos a la propiedad, los que no derivan de un caso fortuito, por lo que deberá demostrar necesariamente que el incumplimiento no se deriva de culpa suya.

En lo relativo al daño, reproduce exactamente los indicados en la demanda principal, sufridos en el acceso vehicular, acceso de personas y antejardín, además del cuadro adjunto que detalla daños de tipo estructural leve, moderado y severo. Asimismo, reitera lo ya dicho sobre daño moral.

Respecto a la relación de causalidad, afirma que el daño sufrido es debido a la filtración de agua ocurrida con fecha 2 de diciembre de 2018, sumada a las anteriores ocurridas los días 29 y 30 de enero de 2018 y el 3 de octubre de 2017, produciendo que la vivienda de autos fuera declarada inhabitable parcialmente, configurándose una relación de causalidad entre el actuar ilícito de la demandada y los perjuicios sufridos por sus representados, pues de no haber ocurrido la rotura de la matriz de agua potable, el daño no se habría provocado, siendo entonces el daño consecuencia directa de la actuación de la demandada.

Por último, señala como último elemento de la responsabilidad extracontractual, que el hecho dañoso o culposo sea imputable a determinada persona. Al efecto, cita los artículos 34, 40, 53 letras a), c) y d), y 57 del Decreto con Fuerza de Ley N° 382, “Ley General de Servicios Sanitarios”, que versan sobre la obligación del prestador (de servicios sanitarios) de controlar permanentemente la calidad del servicio suministrado, siendo de su cargo el



mantenimiento del arranque de agua potable y de la unión domiciliaria de alcantarillado; quedando radicadas en el inmueble que recibe los servicios indicados todas las obligaciones derivadas del servicio, para con el prestador. Hace referencia también al Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado, Decreto N° 50 del año 2002 del Ministerio de Obras Públicas, específicamente el artículo 2, para desarrollar que la rotura de matrices y tuberías que están ubicadas por debajo de la calle, provocan que el agua comience a filtrar de forma permanente, colapsando todo a su alrededor en forma silenciosa, uniforme y subterránea, lo que a todas luces es responsabilidad de empresa Aguas del Altiplano S.A.

Finalmente, cita jurisprudencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Iquique, causa Rol 612-2013; ltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, causa Rol 275-2009; e ltma. Corte de Apelaciones de Arica, causa Rol 84-2017, para sustentar la responsabilidad extracontractual que le achaca a su contraria.

En virtud de lo expuesto solicita al tribunal, en definitiva, que: 1) Se acoja la demanda, condenando a la demandada al pago de la suma de \$46.684.317, por los conceptos indemnizatorios detallados, o la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar; 2) Que la indemnización sea reajustada de acuerdo a las variaciones del I.P.C. desde la fecha en que ocurrieron los hechos ilícitos, hasta el pago efectivo; 3) Que se apliquen los intereses corrientes y reajustes desde la fecha de ocurridos los hechos ilícitos, hasta el pago efectivo; 4) Que la demandada sea condenada en costas.

A folio 8, comparece doña **GABRIELA PATRICIA HIDALGO EGUINO**, abogada por la parte demandante, quien en cumplimiento de la resolución del 20 de diciembre de 2022, que falló las excepciones dilatorias de autos, subsana la demanda, precisando que las obligaciones que se denuncian como incumplidas, son las siguientes: **a)** Mantención preventiva, conservación, operación, fiscalización y renovación de las tuberías que sufrieron roturas en calle Avenida La Tirana, a la altura de la ubicación de la propiedad de sus



representados; y b) Mantenimiento preventiva, conservación, operación, fiscalización y renovación de la matriz y el arranque de agua potable lo que provocó la rotura de la matriz y la fuga de agua en calle Avenida La Tirana, a la altura de la ubicación de la propiedad de sus representados.

En cuanto a la época en que se configuró el incumplimiento, apunta que tal como se describió en el libelo pretensor, ocurrió el 2 de diciembre de 2018.

A folio 10, comparecen don **PATRICIO LORENZO TORRES VELOZO** y don **EDWIN RIFFO GONZALEZ**, abogados, en representación de la demandada **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, quienes contestan la demanda principal de indemnización de perjuicios por **responsabilidad contractual**, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.

Comienzan haciendo una relación de los hechos de la demanda, para luego negar, rechazar y controvertir total y categóricamente cualquier responsabilidad de sus demandados, así como los hechos en que se funda la demanda, expresando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, será carga probatoria de su contraria acreditar aquello, así como también la relación causal de los mismos con los daños descritos en el libelo.

Excepción de prescripción.

Enseguida, oponen excepción de prescripción de la acción de responsabilidad contractual, fundado en que todo el relato de dicha acción opera sobre un hecho singular y único acaecido el 2 de diciembre de 2018, pero que, con ocasión de la demanda subsidiaria por responsabilidad extracontractual, los demandantes cambian su relato, exponiendo que los hechos que denuncian han sido reiterativos en el tiempo. Citan el acápite “3) *Que entre el hecho doloso o culpable y el daño, exista una relación de causalidad*” de la demanda, para sostener que los daños descritos se verificaron en realidad por las filtraciones que la propia contraria dice que ocurrieron los días 3 de octubre de 2017 y 29 y 30 de enero de 2018, y no –al menos íntegramente- por la acontecida el 2 de diciembre de 2018, lo que



constituye una confesión espontánea y judicial de los demandantes.

De tal suerte, sostienen que los daños cuya indemnización se pretende, no ocurrieron el año 2018, sino que el 3 de octubre de 2017, y cita el artículo 2515 del Código Civil, previniendo que el plazo de 5 años allí establecido se encuentra cumplido, pues la demanda se notificó el 10 de noviembre de 2022.

Razonan que misma suerte correrá inevitablemente la acción por daño extrapatrimonial o daño moral, de manera tal que su acción se encuentra igualmente prescrita, debiendo también ser rechazada.

Falta de cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad contractual invocada.

Exponen, en primer lugar, la inexistencia de incumplimiento contractual imputable especificado en la demanda. Niegan cualquier infracción al contrato, así como a la normativa sectorial respectiva, esgrimiendo que de acuerdo a los artículo 34 y 36 bis del DFL N°382, Ley de Servicios Sanitarios, y 91 y 122 del Reglamento de Concesiones Sanitarias de producción y distribución de Agua Potable, para determinar la existencia de un incumplimiento contractual y una infracción a la obligación de su representada de mantener el nivel de calidad de atención de sus usuarios, debe estarse a un criterio de carácter general, dictado antes del otorgamiento de la concesión, el que se encuentra establecido en el respectivo Decreto Tarifario, que fija los estándares de calidad en la prestación del servicio que le corresponde a la empresa de aguas, fijando el contenido y alcance del contrato d prestación de servicios sanitarios, lo que es reconocido en el propio artículo 122 del Reglamento de Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable, que transcribe en lo pertinente, afirmando que ha sido el legislador el que ha fijado el estándar de diligencia que debe observar el concesionario sanitario en la ejecución del contrato de prestación de servicios, mas su contraria no ha señalado con claridad cuáles son las infracciones de su representada a dicho estándar, cuestión que ya no podrá hacer, atendido a que la Litis se encuentra trabada.



Precisa que, a pesar de lo indicado en la resolución que acogió parcialmente la excepción dilatoria de autos, las imprecisiones en la demanda se mantienen, pues los actores no señalan cómo se configura la falta de mantención, operación o fiscalización, ni mucho menos desde cuándo no es renovada la infraestructura sanitaria, no dan cuenta de ningún incumplimiento contractual específico, ni explican cómo se habría vulnerado el estándar de diligencia ordenado por el Decreto Tarifario para hacer frente a emergencias.

En segundo lugar, apuntan a la ausencia de culpa y cumplimiento diligente del contrato de prestación de servicios del contrato por parte de Aguas del Altiplano S.A. Citan el punto 4.2.2.8 del decreto tarifario que aprueba las Bases Definitivas de Estudio Tarifario, relativo a la “*Atención de emergencias*”, afirmando que su representada cumplió cabalmente con los estándares indicados, indicando, además, que la demanda en modo alguno explica cómo se configura el incumplimiento, pues solo indican que hubo una falta de mantención, conservación, operación, fiscalización y renovación, asumiendo – erradamente- que por el solo escurrimiento de agua en la vía pública proveniente de la red de agua potable, su representada incumplió la normativa sanitaria, sin más explicación. Aseguran que los desperfectos pueden provenir de un sinnúmero de circunstancias no imputables a su representada, y hace presente que la red de agua potable está compuesta de tuberías herméticas cuyo interior no se puede inspeccionar, así como tampoco su exterior por encontrarse en el subsuelo, cumpliéndose el deber de mantención de Aguas del Altiplano S.A. con la utilización, en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, de tuberías de alta resistencia con una durabilidad de 50 años, según su fabricante, por tanto, para que se configure la falta de mantención que alegan los demandantes, será menester que la matriz siniestrada se encuentre fuera del rango de durabilidad informado.

En tercer y último lugar, esgrimen la inexistencia de relación de causalidad entre algún incumplimiento contractual y los perjuicios en base a los



mismos argumentos ya expresados, a saber: 1) porque no se ha imputado incumplimiento contractual específico; 2) no se explica cómo se configura la “falta de mantención, fiscalización, operación y renovación”; 3) no existe ningún incumplimiento normativo de su representada, quien cumplió con el estándar de cuidado y diligencia establecido en el respectivo Decreto Tarifario.

Daño reclamado no es indemnizable.

Arguyen que el daño reclamado no es indemnizable, fundado en lo dispuesto en el artículo 1558 del Código de Bello. Explica que el contrato de prestación de servicios sanitarios nace a la vida del derecho desde la emisión del “Certificado de Factibilidad” y es en dicho momento en que debe efectuarse la valoración de previsibilidad a la que hace referencia la norma indicada, siendo obvio que a esa fecha los perjuicios reclamados por los demandantes son absolutamente imprevisibles. Precisa que por dicha razón la norma impone deberes de conducta que son reactivos frente a una emergencia.

Rechazo del daño moral.

En este punto señalan que, si bien la doctrina y jurisprudencia están contestes en que la obligación de indemnizar alcanza también al daño moral, no es menos cierto que para determinar su procedencia y cuantía se debe contar con elementos fácticos y probatorios, para ser regulado prudencialmente por el juez, sin que ello implique arbitrariedad. Hacen presente que el daño debe probarse, no bastando que se acredite que el inmueble que habitan los demandantes sufrió daño, sino que además se debe probar la efectividad de haber sufrido daño moral a consecuencia de ese hecho, la magnitud del daño moral, extensión del mismo, circunstancias particulares de cada demandante que lo hacen procedente a su respecto, el monto, etc, todo ello conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil, todo lo cual no se hace en la demanda donde solo se realiza una descripción general del daño sufrido por un grupo familiar que no es demandante en autos, siendo necesario que se explique las circunstancias particulares de cada demandante. Acusa que la



solicitud indemnizatoria de los actores constituye una “mercantilización del daño moral”, entendida como la transformación de la indemnización en una fuente de lucro o ganancia que excede los límites de lo que jurídica y racionalmente debe ser una reparación, por lo que otorgarla constituiría una fuente de enriquecimiento indebido. Para graficar la desproporcionalidad de los perjuicios extramatrimoniales alegados por su contraria, exponen gráfico que arroja el baremo por daño moral que el Poder Judicial pone a disposición en su página web cuando se consulta por la muerte de un hijo mayor de 30 años para acciones en sede civil, en donde la Corte Suprema, en un 54,5% de los casos ha otorgado indemnizaciones por daño moral que van entre 224 UF a 831UF. En atención a ello, plantea que el daño moral solicitado por los demandantes es manifiestamente exagerado e injustificado, por lo que debe rechazarse.

Por lo expuesto, solicitan en definitiva, se rechace la demanda principal en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En el otrosí de su presentación, contestan demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por **responsabilidad extracontractual**, solicitando su rechazo, con costas.

Exponen los antecedentes de la demanda y, a continuación, niegan, rechazan y controvierten categóricamente cualquier responsabilidad en los hechos que se funda la demanda subsidiaria, indicando que de acuerdo a lo dispuesto en artículo 1698 del Código Civil será carga de su contraria acreditarlos.

Plantea la inexistencia de responsabilidad extracontractual, puesto que la relación entre su representada y los demandantes es de carácter contractual, ya que, en efecto, existe entre ellos un “contrato de prestación de servicios sanitarios”, por lo que cualquier incumplimiento y/o responsabilidad atribuible a Aguas del Altiplano en relación al servicio sanitario que presta a sus usuarios, como ocurre en la especie, deben ser demandados bajo las reglas del estatuto de responsabilidad contractual. Resalta que el contrato referido es de carácter



bilateral, conmutativo y oneroso, por lo que la eventual responsabilidad que le cabría a su representada dice relación solo con los daños directos provenientes de su culpa leve.

Esgrime que debe tenerse en consideración lo dispuesto en los artículo 3 y 5 de la Ley General de Servicios Sanitarios, D.F.L. MOP N°382/88, que definen conceptos como producción, distribución, recolección y disposición de aguas servidas, y servicio público de producción y distribución de agua potable, y el artículo 11 de la misma ley referido a la obligación de cobro y recaudación de las concesionarias respecto de los servicios antes mencionados.

Asimismo, destaca lo dispuesto en los artículos 1, 3, 13, 92 y 93 del Decreto Supremo N° 1199, concluyendo que de ellos se desprende la naturaleza jurídica contractual de la relación entre su representada y los demandantes, agregando que de acuerdo a las disposiciones del DFL 70, de Obras Públicas, de 1998, se establece que la fijación de tarifas por servicios sanitarios de agua potable se aplican a los usuarios finales, cuyo caso es el de los demandantes, y que las 4 diferentes etapas en las que se divide el servicio sanitario no pueden ser divididos, debiendo considerarse un todo. Concluye, en definitiva, que la relación entre los actores y la demandada es siempre contractual, por todas las etapas del proceso, y explican además la tesis doctrinal y jurisprudencial mayoritaria en el derecho chileno es la de la incompatibilidad de la responsabilidad contractual y extracontractual.

Excepción de prescripción.

De otro extremo, oponen excepción de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, reiterando los argumentos expresados al momento de oponer la misma excepción en contra de la acción principal de responsabilidad contractual interpuesta, pero precisando en este caso que el plazo de prescripción de la acción subsidiaria es de 4 años y se encuentra regulado en el artículo 2332 del Código Civil.

Inimputabilidad por falta de culpa.



Mencionan que los demandantes le achacan culpa a su representada en relación al hecho generador de los daños que reclaman, de manera que pesa sobre ellos la carga de acreditarlo.

Siguiendo la exposición del libelo pretensor, sostienen que “antes de la filtración” ocurrida supuestamente el 2 de diciembre de 2018, será carga probatoria de la parte demandante acreditar que en la especie ha existido efectivamente la falta de mantención que se imputa a Aguas del Altiplano, pues roturas de matriz se producen a diario en todas las ciudades del país y se deben a muchas causas (ejemplifica algunas situaciones), y que el deber de mantención que le compete a su representada se cumple con la utilización, en el lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos, de tuberías de alta resistencia con una durabilidad, según su constructor, de 50 años y su reemplazo antes de cumplir su vida útil.

Luego, respecto a la culpa imputada a su representada “durante la filtración”, describe que conforme las “Bases Definitivas ESTUDIO TARIFARIO EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.”, la prontitud en las atenciones de emergencia se separa en 3 estándares. Para el caso de interrupciones del servicio o daños a la propiedad en arranques y uniones domiciliarias, que impliquen corte del servicio de agua potable, obstrucción a la unión domiciliaria, o eventos con daño a la propiedad: a) el tiempo máximo para llegar al lugar de la emergencia será de 2 horas; b) el tiempo máximo para otorgar una solución provisoria a la emergencia será de 5 horas; y c) el tiempo máximo para otorgar una solución definitiva a la emergencia será de 2 días. Mientras que en caso de interrupciones del servicio o daños a la propiedad en redes públicas: a) el tiempo máximo para llegar al lugar de la emergencia será de 2 horas; b) el tiempo máximo para otorgar una solución provisoria a la emergencia será de 6 horas; y c) el tiempo máximo para otorgar una solución definitiva a la emergencia será de 2 días. Sostiene que en la especie la parte demandante señaló de manera expresa que su



representada demoró más de 6 horas en la reparación de la ruptura, de lo cual se aprecia que Aguas del Altiplano cumplió cabalmente con su obligación de atender con prontitud la emergencia conforme las bases referidas, ya que el tiempo máximo para otorgar una solución definitiva, en cualquiera de los casos expuestos, es de 2 días. Agrega a ello que el deber de contar con un procedimiento permanente para atender emergencias se cumple al disponer su representada de un servicio de atención de emergencias 365 días del año y las 24 horas del día.

Continúa alegando respecto de la falta de culpa de Aguas del Altiplano “después de la filtración” que lo que los demandantes pretenden plantear como un acto culposos no es más que el hecho de haber actuado su representada conforme a su firme convicción de no tener responsabilidad en los hechos y daños que se le imputan.

Inexistencia de relación de causalidad.

En este acápite, apuntan que se debe acreditar que la rotura es consecuencia de un hecho culpable de su representada, lo que no ha ocurrido, por lo que este elemento no podrá ser satisfecho en el caso de marras.

Rechazo del daño moral.

Sobre este punto, reproducen los argumentos ya esgrimidos sobre el tema, a propósito de la contestación a la acción principal, los que no se reiterarán por economía procesal.

Por lo expuesto, solicita en definitiva, se rechace la demanda subsidiaria en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 12, comparece doña **GABRIELA PATRICIA HIDALGO EGUINO**, en representación de la parte demandante, evacuando trámite de réplica solicitando el rechazo de las alegaciones y defensas opuestas en la contestación de la demanda, con costas.

Previene que no es efectivo que la acción impetrada esté prescrita, pues no es efectivo que se demande por daños ocurridos en 2017, siendo claro en el



texto de la demanda que sus representados sufrieron perjuicios producto del acto perpetrado en diciembre de 2018. Señala que de ningún modo la demandada puede pretender eludir su responsabilidad beneficiándose de la negligencia que muestra hace años y que finalmente terminaron en los daños padecidos en 2018.

Cita doctrina de los profesores Pablo Rodríguez Grez, Hernán Corral Talciani y jurisprudencia de la Corte Suprema (autos Rol 8106-2015), para sostener que es a partir de la producción del daño que puede nacer la acción reparatoria y, de acuerdo al principio *actio nata*, es solo desde entonces que puede comenzar a correr la prescripción.

Por su parte, señala que tampoco es efectivo que no se detallaran las obligaciones incumplidas, pues la propia demandada indica cuáles son los incumplimientos. Acusa además, que su contraria pretende que sus obligaciones se restrinjan a tener y publicar un procedimiento de emergencias, lo que resulta absurdo.

Asimismo, desmiente la ausencia de culpa que alega la demandada y cuestiona que aquella plantea que, en el peor de los casos, la culpa es del fabricante de las tuberías, debiendo ella limitarse únicamente a cambiar tuberías que tampoco es posible revisar.

Finalmente, contraviene la afirmación que alude a que no se cumplen el resto de los requisitos de la responsabilidad civil, principalmente lo relativo al nexo de causalidad y el daño indemnizable, indicando que con la debida mantención se puede prevenir los daños, lo que le corresponde a la demandada atendido a sus deberes legales y experticia, pues de lo contrario, no habría obligaciones para ella.

A folio 16, comparecen don **PATRICIO LORENZO TORRES VELOZO** y **EDWIN RIFFO GONZÁLEZ**, en representación de la demandada. En primer lugar, evacúan el trámite de dúplica respecto de la **demanda de responsabilidad civil contractual**, ratificando las alegaciones, defensas y



excepciones opuestas en su contestación, haciendo énfasis en lo siguiente:

En cuanto a la prescripción de la acción indemnizatoria en sede contractual, manifiestan que su contraria desconoce sus propios dichos, pues de lo expresado en su libelo se desprende que su patrimonio sufrió daños antes de la rotura de matriz que dice haber ocurrido en diciembre de 2018, por lo que deberá probar que los daños derivados de aquello, son distintos a aquellos del año 2017.

Enseguida, insisten en la ausencia de especificación de las obligaciones contractuales incumplidas por Aguas del Altiplano, pues no se señalan con claridad cuáles son específicamente las infracciones al estándar de diligencia establecido por la normativa sectorial aplicable en la especie que su representada no ha observado, cuestión que ya no podrá hacer.

Luego, en lo que respecta a la supuesta culpa de su representada, destacan que siendo el suministro de agua potable parte de sus obligaciones, ningún perjuicio se le ha reclamado por la falta del mismo. Hacen presente además, que su “tesis” no consiste en que nadie asumiría la obligación, sino en que la obligación de reparar los daños es de aquel por cuya culpa estos han sido generados, refutando que exista una imputación de culpa al fabricante de las tuberías. Reafirman que los demandantes siguen sin explicar cómo es que se configura la “falta de mantención” en la que hace consistir el incumplimiento contractual.

En relación al resto de los requisitos de la responsabilidad extracontractual, reiteran que frente a la falta de determinación de un incumplimiento específico imputable y a los detalles del mismo, resulta imposible construir un nexo causal y, por otra parte, se trata de daños que no pudieron preverse, por lo que no resultan indemnizables bajo el estatuto de responsabilidad contractual.

En segundo lugar, evacúan trámite de duplica de la **demanda subsidiaria**, ratificando todos los antecedentes de hecho y de derecho



expuestos en la contestación de la demanda.

A folio 36, consta el llamado a las partes a conciliación, el cual no prosperó.

A folio 39, se recibió la causa a prueba.

A folio 100, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, subsanado a folio 8, comparece doña GABRIELA PATRICIA HIDALGO EGUINO, abogada, en representación de don **CRISTIAN RAMON RAMIREZ ABE** y doña **JEISSY EDITH MATURANA ROMO**, todos con domicilio en Avenida La Tirana N° 1924 de la comuna de Iquique; quienes interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada por su gerente don CHRISTIAN BARAHONA RUBIO; y, por los motivos señalados en la parte expositiva del fallo, solicita en definitiva que: 1) Se acoja la demanda, condenando a la demandada al pago de la suma de \$46.684.317, por los conceptos indemnizatorios detallados, o la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar; 2) Que la indemnización sea reajustada de acuerdo a las variaciones del I.P.C. desde la fecha en que ocurrieron los hechos ilícitos, hasta el pago efectivo; 3) Que se apliquen los intereses corrientes y reajustes desde la fecha de ocurridos los hechos ilícitos, hasta el pago efectivo; 4) Que la demandada sea condenada en costas.

En subsidio, interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Aguas del Altiplano, ya individualizada, solicitando en definitiva que: 1) Se acoja la demanda, condenando a la demandada al pago de la suma de \$46.684.317, por los conceptos indemnizatorios detallados, o la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar; 2) Que la indemnización sea reajustada de acuerdo a las variaciones del I.P.C. desde la fecha en que ocurrieron los hechos ilícitos,



hasta el pago efectivo; 3) Que se apliquen los intereses corrientes y reajustes desde la fecha de ocurridos los hechos ilícitos, hasta el pago efectivo; 4) Que la demandada sea condenada en costas.

SEGUNDO: Que a folio 10, comparecen don **PATRICIO LORENZO TORRES VELOZO** y don **EDWIN RIFFO GONZALEZ**, abogados, en representación de la demandada **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, quienes contestan la demanda principal de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual y la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, solicitando, por las razones ya expresadas en la parte expositiva, sean rechazadas en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que a folio 12, los demandantes evacúan el trámite de réplica en los términos señalados en la parte expositiva.

Que a folio 16, la demandada evacúa el trámite de dúplica en los términos señalados en la parte expositiva.

CUARTO: Que, la parte demandante, para acreditar su pretensión, rindió las siguientes probanzas:

Instrumental.

A folio 1:

1) Certificado de matrimonio de los demandantes; **2)** Certificado de Dominio Vigente de fecha 12 de marzo de 2019, cuya inscripción rola a Fojas 4030, N° 6315 del Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, con su respectiva copia de Inscripción; **3)** Carta de fecha 6 de diciembre de 2018; **4)** Ingreso de solicitud a Aguas del Altiplano N° de caso: CAS-691171 de fecha 19 de febrero de 2019; **5)** Carta respuesta a CAS-691171, de fecha 22 de febrero de 2019, emitida por Aguas del Altiplano; **6)** Resolución N°214/2019, de fecha 6 de junio de 2019, dictado por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Iquique.

A folio 46:



Informe realizado por el arquitecto don Marcelo Fuentes Velásquez, de fecha 10 de febrero 2019.

Testimonial.

A folio 77, constan las declaraciones de doña Mónica Lillo Contreras, don Jorge Villavicencio Zamorano y don Marcelo Fuentes Velásquez, de fecha 11 de octubre de 2023.

QUINTO: Que, la parte demandada rindió las siguientes probanzas:

Instrumental:

A folio 59:

1) Copia Oficio Ordinario N° 73, de 9 de enero de 2014, suscrito por el Superintendente de Servicios Sanitarios (S) Gabriel Zamorano Seguel, dirigido a la Sra. Juez del Segundo Juzgado de Letras de Iquique; 2) Manual Tuberías y Fittings HDPE, emitido por el fabricante DURATEC - VINILIT S.A.; 3) Ejemplar de “Bases Definitivas Estudio Tarifario EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.”, elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; 4) Resolución Exenta N° 988, dictada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 24 de marzo de 2017; 5) Publicación de la Resolución Exenta N° 988 del 24 de marzo de 2017, en la edición del Diario Oficial de la República de Chile del día 08 de mayo de 2017; 6) Acta de “Acuerdo de Prórroga Superintendencia de Servicios Sanitarios y Aguas del Altiplano S.A.”, de fecha 29 de diciembre de 2016; 7) Manual de uso y Mantenición de la Vivienda, Región de Tarapacá, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, año 2007; 8) Manual del cliente, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; 9) Boletas electrónicas N°s 18622646, 18786738 y 18951713, emitidas por AGUAS DEL ALTIPLANO S.A., para el servicio número 410252-5, avenida La Tirana 1924, Iquique, a nombre de don Cristian Ramírez Abe, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

Confesional:



A folio 80, obra declaración confesional del absolvente don Cristian Ramírez Abe y doña Jeissy Maturana Romo.

Otra prueba:

1) Respuesta a oficio remitida vía correo electrónico por la Dirección de Obras Municipales de Iquique, con fecha 20 de octubre de 2023, a folio 86; y 2) Oficio NR-3707, remitido por la Jefa de Oficina Regional de Tarapacá de la Superintendencia de Servicios Sanitarios con fecha 7 de diciembre de 2023, a folio 95.

En cuanto a la excepción de prescripción.

SEXTO: Previo a entrar al fondo de las acciones deducidas, habrá de avocar primeramente el análisis al estudio de la excepción de prescripción que la parte demandada ha opuesto en contra de la acción principal de responsabilidad contractual, así como también de la acción subsidiaria de responsabilidad en sede extracontractual, por lo que se analizarán conjuntamente.

En tal sentido, cabe hacer presente que el artículo 2492 del Código Civil establece: *“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”*.

A su vez, en lo atinente a la responsabilidad contractual, los artículos 2514 y 2515 del citado cuerpo legal, disponen: *“La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”* y *“Este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias”*.

Y por su parte, en lo que respecta a la responsabilidad extracontractual derivada de los delitos y cuasidelitos, el artículo 2332 del Código de Bello prescribe: *“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben*



en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

SÉPTIMO: Que, en la especie la demandada hace consistir su alegación en que los actores han referido que los daños que alegan haber sufrido no son consecuencia -al menos íntegramente- de la filtración de agua acontecida el día 2 de diciembre de 2018. De contrario, asegura que los daños cuya indemnización se pretende ocurrieron el 3 de octubre de 2017, razón por la cual los plazos de 5 y 4 años previstos en los citados artículos 2515 y 2332, se encuentran de sobra cumplidos, puesto que la demanda de autos fue notificada el 10 de noviembre de 2022.

Pues bien, de la atenta lectura del libelo pretensor, es posible advertir que en efecto los demandantes, a propósito de su acción subsidiaria, han referido la ocurrencia de filtraciones de agua hacia su domicilio previas al hecho denunciado en estos autos –de fecha 2 de diciembre de 2018–, las que se habrían verificado los días 29 y 30 de enero de 2018 y el 3 de octubre de 2017. Sin embargo, aquellos hechos han sido expuestos de modo ejemplificativo, con el objeto de describir que la conducta de la empresa sanitaria ha provenido de culpa, y que entre el hecho culpable y el daño, existe una relación de causalidad.

Lo anterior queda aún más claro desde que la demanda expone los hechos distinguiéndolos en etapas, señalando que la demandada ha incurrido en una conducta culpable tanto antes de la ocurrencia de la filtración de agua objeto de su demanda, como durante su ocurrencia y ya verificada la filtración, pasando luego a detallar cada uno de dichos momentos. Especifica que “antes de la de la filtración de agua ocurrida el 2 de diciembre de 2018” tuvo lugar roturas de matriz y un problema de alcantarillado por obstrucciones en el colector que produjeron filtraciones de agua hacia su propiedad. Todo ello, con el afán de exponer una falta de mantención preventiva de las tuberías ubicadas frente a su domicilio por parte de Aguas del Altiplano, pasando luego a describir la conducta de la demandada “durante la filtración” producida por la rotura de



matriz del ya mencionado 2 de diciembre de 2018.

De tal suerte, no puede entenderse en caso alguno que el hecho denunciado por lo actores sea aquel acontecido el 3 de octubre de 2017, pues resulta evidente que en todo momento la parte demandante refiere que los daños denunciados son producto del hecho verificado, como se ha dicho reiteradamente, el 2 de diciembre de 2018. Es más, a propósito de la responsabilidad que se imputa en sede contractual, la demanda omite cualquier señalamiento a otros hechos que no sean el ya referido, por lo que menos aún puede atribuirse que dicha acción se encuentre fundada en un hecho anterior, para así alegar artificiosamente un plazo de prescripción.

Así las cosas, la excepción opuesta deberá ser desestimada respecto de ambas acciones, pues a la luz de los antecedentes que obran en autos, entre el hecho alegado por los actores y la notificación de la demanda –el 10 de noviembre de 2022– no han transcurrido los 5 y 4 años necesarios para declarar la prescripción de las respectivas acciones por responsabilidad contractual y extracontractual de marras.

A mayor abundamiento, aun cuando se hubiese planteado que los daños responden a una concatenación de hechos que van desde el 3 de octubre de 2017 al 2 de diciembre de 2018, lo cierto es que para contabilizar el plazo de prescripción, en una u otra acción, debe atenderse a la fecha del último hecho consignado, lo que también lleva irremediablemente al rechazo de la excepción, tanto para la demanda principal, como para la subsidiaria.

En cuanto al fondo:

OCTAVO: Que, del estudio de los hechos narrados en la demanda y en presentación de folio 8, aparece que la responsabilidad contractual y extracontractual reclamada por los demandantes, deriva de la falta de mantención preventiva, conservación, operación, fiscalización y renovación de las tuberías, matriz y arranque de agua potable ubicadas a la altura de Avenida La Tirana N° 1924, Iquique (Sitio N° 39 de la Manzana E de la Población



Ampliación Nueva Victoria de la comuna de Iquique), lo que provocó una supuesta rotura de matriz de agua potable fuera de su propiedad, ocurrida el día 2 de diciembre de 2018, a las 05:00 horas aproximadamente, generando una fuga de agua hacia el domicilio indicado, que habría producido daños estructurales leves, moderados y severos en el inmueble de los actores; deterioros que llevaron a que la vivienda fuese declarada inhabitable parcialmente.

En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable.

NOVENO: Que, lo primero que debe determinarse es la naturaleza del vínculo jurídico existente entre la demandada y los actores por los hechos descritos en el motivo precedente, para lo cual ha de tenerse presente una serie de normas que regulan la actividad sanitaria. En primer lugar, el artículo 92 del Decreto N° 1199 del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el “Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas y de la Norma Sobre Calidad de Atención a los usuarios de estos Servicios” establece: *“La relación contractual entre el usuario y el prestador de los servicios públicos sanitarios se entenderá perfeccionada desde la fecha en que el prestador emita el certificado de instalación de agua potable y de alcantarillado. A partir de esa fecha será exigible para el prestador el cumplimiento de los niveles de calidad referidos en el artículo anterior”*.

A su turno, la Ley General de Servicios Sanitarios en su artículo 5, inciso 2° dispone: *“Es servicio público de distribución de agua potable, aquel cuyo objeto es prestar dicho servicio, a través de las redes públicas exigidas por la urbanización conforme a la ley, a usuarios finales obligados a pagar un precio por dicha prestación”*, definición en la que es posible encuadrar la actividad de la empresa demandada.

Por su parte, el artículo 40 de la citada Ley prevé en su primer inciso: *“El mantenimiento de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y*



de alcantarillado es de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble”, continuando el inciso segundo: “El mantenimiento del arranque de agua potable y de la unión domiciliaria de alcantarillado, será ejecutado por el prestador en los términos dispuestos en el decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas”.

DÉCIMO: Así, de las normas expuestas se colige que la relación contractual que vincula a los demandantes, en calidad de usuarios, con la accionada, como empresa de servicios sanitarios, dice relación con aquellas situaciones que se susciten con respecto a las instalaciones interiores domiciliarias y arranque de agua potable, y de la unión domiciliaria de alcantarillado. Sin embargo, los hechos expuestos en el libelo pretensor se refieren específicamente a una falla en la red pública que comprende la distribución de agua potable y/o recolección de aguas servidas, las cuales se encuentran definidas en las letras e), f) y n) del artículo 53 de la Ley General de Servicios Sanitarios, estando regulado el cumplimiento de dichas obligaciones en la legislación y reglamentos atinentes a la actividad sanitaria, por lo que se puede concluir que las infracciones denunciadas, no devienen en el referido vínculo usuario-prestador de servicios sanitarios, sino que dice relación con la observancia de la conducta impuesta legal y reglamentariamente al desarrollo de tal labor, ya que no es en virtud de dicha relación contractual, que supuestamente se generan los daños, sino producto de la falla de la red pública de agua potable, fuera del domicilio de los actores, por lo que corresponde analizar la acción bajo la luz del régimen de responsabilidad extracontractual, lo que llevará al rechazo de la acción principal de responsabilidad civil contractual, según se dirá en lo resolutivo de este fallo, debiendo pasar ahora directamente al estudio de la acción subsidiaria.

En cuanto a los elementos de la responsabilidad extracontractual.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la responsabilidad extracontractual demandada está contenida en el artículo 2314 del Código Civil, que dispone:



“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

En este sentido, en base a lo previsto en los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código Civil, la doctrina ha señalado que los elementos para la concurrencia de la responsabilidad extracontractual son:

1. La existencia de un hecho u omisión que provenga de dolo o culpa del autor.
2. Que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.
3. Que el hecho u omisión cause un daño a la víctima.
4. Que entre el hecho u omisión dolosa o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fin de acreditar al primer elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, la acción u omisión culpable del agente, obra en los autos los siguientes antecedentes:

1.- Del certificado de dominio vigente emitido con fecha 12 de marzo de 2019 y de la copia de inscripción de dominio, ambas acompañadas a folio 1; y de la copia del Certificado de Regularización N°022/2007 adjunto a respuesta a oficio remitido por la Dirección de Obras Municipales de Iquique vía correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2023, acompañado a folio 86, ponderados conforme lo dispone el artículo 342 N°2 y N°3, respectivamente, en relación al artículo 1700 del Código Civil, la que hace plena prueba, se desprende que el Sitio N° 39 de la Manzana E de la Población Ampliación Nueva Victoria de la Comuna de Iquique, inscrito a fojas 4030 N° 6315 del Registro de Propiedad del año 2014, corresponde al inmueble ubicado en Avenida La Tirana N° 1924 de la comuna de Iquique y es de propiedad del demandante, don Cristian Ramón Ramírez Abe, quien lo adquirió por compra mediante escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2014.

2.- Del certificado de matrimonio emitido con fecha 10 de septiembre de



2019, acompañado a folio 1, valorado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 342 N°6 en relación al artículo 1700 del Código Civil, la que hace plena prueba, se desprende que los demandantes, don Cristian Ramón Ramírez Abe y doña Jeissy Edith Maturana Romo, contrajeron matrimonio en régimen de sociedad conyugal el 3 de abril de 2001, por lo que de conformidad a lo prescrito en el artículo 1725 N° 5 del Código Civil, el inmueble singularizado en el número anterior compone el haber social de los actores.

3.- De la copia de Resolución N° 214/2019 de fecha 6 de junio de 2019, emanado de la Dirección de Obras Municipales de Iquique, acompañada a folio 1, apreciado conforme lo dispone el artículo 342 N°3 en relación al artículo 1700 del Código Civil, la que hace plena prueba, se desprende que el inmueble ubicado en Av. La Tirana N° 1924 de Iquique, de propiedad de los demandantes, sufrió daños que afectan la integridad de sus residentes, resolviéndose por la mentada institución declararlo inhabitable parcialmente.

Que de la testimonial de folio 77, de lo declarado por la testigo doña Mónica Lillo, quien refiere ser vecina del demandante, en síntesis se extrae que, al primer punto de prueba responde afirmativamente, señalando que en la madrugada de diciembre de 2018 se escuchó que caía bastante agua, viendo la situación en el día, cuando observó que el agua salía de calle, por Avenida La Tirana a la altura de Campo de Deporte. Asegura que había un socavón y que trabajadores de Aguas del Altiplano hicieron un hoyo profundo que duró días, advirtiéndole además que al vecino se le salía la cerámica.

Por su parte, de la declaración del testigo don Jorge Villavicencio, quien también indica ser vecino del demandante, en síntesis se extrae que, sí sucedieron los hechos descritos en la demanda el 2 de diciembre de 2018 en Avenida La Tirana con Campo de Deporte, al frente del agro, al lado de su vivienda. Luego llegaron hombres de Aguas del Altiplano a trabajar porque había una fuga de agua que afectó al demandante, pues le desniveló y provocó daños en su casa que se podían observar a simple vista por fuera del domicilio.



Señala que las fugas de agua ocurrieron en la vía pública, por lo que cambiaron varias cañerías que antes eran de pvc, por una de material de color negro, como manguera, siendo la mayoría de afuera. Agrega que después que terminaron de trabajar el personal de Aguas del Altiplano, al demandante se le desniveló la casa, se resquebrajó la cerámica y el portón se descuadró, manteniéndose así hasta el día de hoy.

Y, a su turno, de la declaración del testigo don Marcelo Fuentes Velásquez, de profesión arquitecto, quien manifiesta haber realizado un informe de daños respecto de la vivienda afectada; en síntesis se extrae que, la propiedad de autos tiene daños debidos a un socavamiento de las fundaciones y desplazamiento de material del terreno, quedando un vacío en el área del antejardín, originado por una seguidilla de fugas de agua en las tuberías de pvc, las que posteriormente fueron reemplazadas por HDP, trabajos que se han realizado en toda la ciudad. Sostiene que por parte de la empresa, se hizo retiro de terreno a menos de un metro de la fachada y cuando rellenaron, no compactaron, lo que produjo asentamiento del terreno. Tiene conocimiento de lo ocurrido a través de fotografías respecto de los trabajos que se realizaron por personal de Aguas del Altiplano, justo frente a la propiedad dañada, a menos de un metro, en la vereda. No vio la fuga de agua, pero sí los daños concordantes con aquella cuando fue personalmente al lugar en febrero de 2019.

Que las declaraciones de los testigos reúnen los requisitos del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, por lo que hacen plena prueba del hecho de que en la madrugada del 2 de diciembre de 2018, afuera de la propiedad ubicada en Avenida La Tirana N° 1924, comuna de Iquique, se produjo una falla (rotura) en la red pública sanitaria que provocó una gran filtración subterránea de agua hacia el domicilio de los demandantes.

Que de los antecedentes antes reseñados, y de la prueba instrumental indicada en el basamento cuarto, analizados en conjunto, emanan



presunciones que por reunir los caracteres de graves, precisas y concordantes, conforme lo dispone el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1712 del Código Civil, permiten tener por establecido:

Que producto de una gran filtración subterránea de agua ocurrida el 2 de diciembre de 2018 frente al inmueble de los actores, éste se vio afectado por deterioros de diversa índole, consistentes en fisuras y grietas de vigas y pilares; desprendimiento de cerámica; desnivel y descuadre de portón; hundimiento y asentamiento en muros y radier de antejardín; y daños en cámara de alcantarillado y reposición de agua potable desde el medidor hasta la casa; todo ello originado a raíz de una rotura en la red pública sanitaria a cargo de la demandada Aguas del Altiplano S.A., empresa que informada del evento, procedió a realizar trabajos de reparación de la red de agua siniestrada, para lo cual excavó el terreno (vereda) y cambió las primitivas tuberías de PVC por otras de HDPE (color negro), de mayor resistencia y vida útil para el transporte de agua, sin compactar posteriormente el relleno del terreno extraído, declarándose que los daños de la propiedad afectada afectan la integridad de sus residentes. Luego, por Resolución N° 214/2019 de fecha 6 de junio de 2019 emanada de la Dirección de Obras Municipales de Iquique, previa constatación visual y comprobada la existencia de riesgo para los ocupantes del inmueble afectado, éste fue declarado inhabitable parcialmente.

DÉCIMO TERCERO: Que, establecida entonces la ocurrencia de un hecho ilícito, toca dilucidar seguidamente si ha existido culpa de parte de su autor, conforme a la teoría subjetiva que sigue el Código de Bello. En este sentido, los hechos asentados en el motivo anterior permiten concluir que Aguas del Altiplano S.A. infringió las normas de los artículos 40 de la Ley de Servicios Sanitarios y 99 del Reglamento, al no dar cumplimiento a su deber de realizar una mantención y atención preventiva de la red pública, de manera oportuna, adecuada y continuada; en consecuencia, si la empresa demandada hubiese empleado la diligencia y cuidado que le eran exigibles, adoptando las



medidas adecuadas y oportunas de reparación o de renovación de las tuberías que estaban en mal estado, éstas no se habrían fatigado al punto de fracturarse, produciendo la filtración de agua desde la vía pública que dañó el inmueble.

Que bajo estas circunstancias, la empresa sanitaria ha incurrido en una conducta ilícita que toca calificar de negligente (culpa por omisión), ya que de acuerdo a su experiencia en el rubro, debió prever los efectos que produciría una rotura de tuberías y/o matriz y, con ello, las consecuencias de no efectuar las mantenciones y/o cambios en las cañerías o ductos de agua, sobre todo considerando que para su reparación se hizo necesario excavar terreno muy próximo al domicilio de los actores, el que no fue rellenado adecuadamente y que inexorablemente afectaría los cimientos del inmueble, llevando a que se declarara parcialmente inhabitable. En este sentido, la demandada debió desplegar las medidas preventivas de resguardo que fueran útiles y eficaces para ejecutar las labores de reparación pertinentes, acordes con la naturaleza y particularidades del siniestro, considerando los riesgos que podía entrañar para el estado de conservación del inmueble de los demandantes. Al no hacerlo, su actuar no puede ser considerado inocuo o carente de relevancia jurídica; por el contrario, de acuerdo con las exigencias de cuidado contenidas en las normas reglamentarias citadas precedentemente, la conducta de la empresa demandada debe ser calificada de negligente o descuidada, aceptando la ocurrencia de las consecuencias dañosas a la vivienda sublite.

Que lo asentado precedentemente no fue desvirtuado de ninguna manera en autos por la demandada, quien tenía la carga de hacerlo, conforme lo expresa el artículo 1698 del Código Civil, por lo que preciso resulta rechazar todas las alegaciones y defensas del demandado en ese sentido.

Asimismo, no obsta a lo razonado la afirmación de la entidad sanitaria de haber cumplido cabalmente sus obligaciones legales y reglamentarias, especialmente aquella relativa a los estándares indicados para la atención de



emergencias de conformidad a lo establecido en el “Decreto Tarifario que aprueba las Bases Definitivas de Estudio Tarifario”, cuestión que, por lo demás, tampoco logró ser fehacientemente acreditada, resultando insuficiente la prueba instrumental de folio 59.

Así las cosas, se tiene por acreditada la concurrencia del primer elemento de la responsabilidad extracontractual.

DÉCIMO CUARTO: Que, habiéndose establecido la existencia de un hecho u omisión que proviene de dolo o culpa del autor, en la forma señalada en el fundamento precedente, y siendo la demandada una persona jurídica, capaz de cometer un delito o cuasidelito civil, y que responde civilmente de los hechos dañosos causados por quienes trabajan o se desempeñan a su cargo en actividades y faenas propias de la empresa, lo que constituye la regla general en materia de responsabilidad extracontractual, no probándose la situación contraria en la causa, entonces se debe determinar la concurrencia del tercer elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, que el hecho u omisión ocasione daño a la otra parte.

Que, en la especie, el daño consiste en los perjuicios provocados al inmueble de marras, acreditado en autos con los elementos probatorios ya examinados en el motivo décimo segundo, por lo que ha de estarse a lo ya consignado en aquel. Concurriendo entonces en la causa el elemento daño analizado.

DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a la concurrencia del cuarto elemento de la responsabilidad extracontractual, esto es, que entre el hecho u omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad; del mérito de la prueba de la parte demandante, en especial con las declaraciones testimoniales que obran a folio 77, que reúnen los requisitos del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, que hace plena prueba; sumado a la copia de Resolución N° 214/2019 de fecha 6 de junio de 2019, emanada de la Dirección de Obras Municipales de Iquique, agregada a folio 1,



apreciado conforme lo dispone el artículo 342 N°3 en relación al artículo 1700 del Código Civil, por lo que hace plena prueba del hecho de que en el sector indicado en el libelo se produjo una filtración de agua que ha generado daños en la vivienda de autos, que han llevado a que la misma sea declarada inhabitable parcialmente.

Que, de los elementos probatorios antes reseñados, analizados en conjunto, emanan presunciones que por reunir los caracteres de gravedad, precisión y concordancia, conforme lo dispone el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1712 del Código Civil, permiten tener por establecido que los daños sufridos por los actores son consecuencia directa e inmediata del ilícito ya asentado en autos y, por ende, se tiene por establecido el nexo causal requerido para la procedencia de la responsabilidad extracontractual reclamada, pues la infracción al deber de mantenimiento preventivo de la red pública por parte de la de la empresa sanitaria demandada –conducta culposa– se erige como condición necesaria y generadora de la rotura de tuberías que originó la filtración de agua causante de los perjuicios reclamados.

DÉCIMO SEXTO: Que, como se viene diciendo, ha quedado acreditado en los motivos que anteceden la concurrencia en el caso de los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad civil extracontractual, correspondiendo entonces adentrarnos en el estudio de los perjuicios demandados.

En cuanto a los daños demandados y el monto de las indemnizaciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo padecido por quien solicita que se le indemnice, y si bien es cierto que en todo caso el daño emergente es indemnizable, también lo es que el que lo reclama debe probarlo. En este sentido, la especie y monto de los perjuicios acarreados por un delito o cuasidelito, sólo resulta de la prueba que se rinda y



queda sujeto a la apreciación que de ella se haga por los jueces de fondo, conforme las reglas del título XXXV del libro IV del Código Civil.

Que, en la especie, los actores reclaman, a título de daño emergente, la suma de \$16.684.317, haciéndolo consistir en el daño patrimonial sufrido, constituidos por los gastos incurridos en la reparación de su vivienda, conforme a presupuesto de obras que se detalla en el libelo y que es posible observar en el informe acompañado a folio 46, documento privado emanado de un tercero que, si bien compareció en autos como testigo, su sola declaración no resulta ser suficiente, en los términos fijados en el numeral 1 del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, para constituir una presunción judicial cuyo mérito probatorio pueda ser apreciado en conformidad al artículo 426 del mismo cuerpo legal.

A su vez, la demás prueba rendida por la parte demandante da cuenta de otros antecedentes, mas no de los gastos incurridos o necesarios para llevar a cabo las reparaciones de los daños que afectan al inmueble de subjuice.

Que en consecuencia los actores no lograron acreditar en autos el daño patrimonial efectivamente causado por el actuar negligente de la demandada, por lo que preciso será rechazar este acápite en todas sus partes.

DÉCIMO OCTAVO: Que en cuanto al daño moral padecido, los accionantes, demandan la suma total de \$30.000.000, o el monto que SS estime prudencialmente en justicia, correspondiente al menoscabo psíquico emocional grave provocado en el grupo familiar, que ha afectado sus sentimientos, causándoles un permanente agobio y preocupación diaria de poder reparar su casa, lugar donde viven y en la cual han invertido para conservarla, y todo lo que es consustancial al hecho de que su vivienda sea inundada por una rotura de matriz, la humedad del suelo, incomodidad y preocupación.

La prueba de este supuesto analizado les corresponde a los demandantes, conforme al artículo 1698 del Código Civil.



Que, en lo relativo al daño moral, interesa dejar establecido que no es pacífico en la doctrina la elaboración de su concepto, y teniendo presente que la jurisprudencia no ha sido del todo precisa, conviene a este respecto utilizar el concepto amplio dado por Carmen Domínguez Hidalgo, en su libro, el daño moral cuando expresa que está constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial, que irroga una lesión a un interés moral, por uno que se encontraba obligado a respetarlo (Editorial jurídica de Chile Tomo I, noviembre de 2000, página 84).

Que el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, lo que significa que está elevado a la categoría constitucional el derecho de la persona a mantener su integridad psíquica y, por lo tanto, para el ordenamiento jurídico representa un interés que debe ser protegido de manera que cualquier acción desplegada por persona o agente alguno que provoque o atente contra la integridad, constituya un perjuicio y, por ende, un daño que el derecho deba restablecer, sea efectiva o alternativamente.

Que, el daño moral entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto a la conculcación en los derechos fundamentales de los demandantes, los que se ven afectados por los daños estructurales de su vivienda, lugar que le sirve de hogar a la familia y que mediante el resolución de la Dirección de Obras Municipales de esta ciudad se declara inhabitable parcialmente, por poner en riesgo la integridad de sus habitantes, cuestión que evidentemente altera el normal proyecto de vida y familia que tienen los demandantes y que de modo natural se traduce en la idea de aflicción, preocupación y temor por el daño provocado por la conducta negligente de la empresa sanitaria demandada, necesaria e indefectiblemente conlleva a una aflicción psíquica, sumado a los malos ratos que ello conlleva, además de la desvalorización que experimenta la propiedad, el riesgo que implica para la integridad física de los actores y su familia al transitar por las zonas afectadas



de su hogar, lo que no requiere prueba, dado que la infracción al deber de cuidado por parte de la demandada se encuentra acreditada en autos; por tanto, las consecuencias que nacen de su propia naturaleza son obvias y lógicas, y no pueden desconocerse en un procedimiento, aunque se aprecie la prueba en forma legal, pues el mínimo razonamiento, criterio o principio lógico, da por acreditado el daño moral como se explicó.

En síntesis, de acuerdo a los antecedentes allegados al proceso, en especial la prueba documental consistente en copia de Resolución N° 214/2019 de fecha 6 de junio de 2019, emanada de la Dirección de Obras Municipales de Iquique, agregada a folio 1, que declara inhabitable parcialmente el inmueble subjudice, el informe de arquitecto de folio 46 y testimonial de doña Mónica Lillo, quien depuso: *“vi bien complicado al vecino”; “veía al vecino continuamente viendo esos temas, él es bien dedicado con su casa”*; constituyen a juicio de este sentenciador indicios serios y precisos que conforman una presunción grave y concordante, por lo que es posible presumir la existencia de un daño moral, consecuencia del sufrimiento y angustia que necesariamente debieron experimentar ambos demandantes, al ver cómo parte de su casa se hundió y agrietó. En consecuencia, considerándose la gravedad del daño, la modificación de las condiciones de vida de los afectados y la permanencia del mismo, todo lo que no ha sido desvirtuado por la contraria, este sentenciador evaluará el daño moral en la suma de \$ 14.000.000 (catorce millones de pesos) para don CRISTIAN RAMIREZ ABE; y en la suma de \$ 14.000.000 (catorce millones de pesos) para doña JEISSY MATURANA ROMO, acogándose la demanda en este rubro, solo por los montos antedichos, respecto de los demandantes.

DÉCIMO NOVENO: Que la prueba rendida por la demandada especialmente la copia de Oficio Ordinario N° 73, de 9 de enero de 2014; el Manual Tuberías y Fittings HDPE; el ejemplar de “Bases Definitivas Estudio Tarifario EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS AGUAS DEL ALTIPLANO



S.A.”, elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; la Resolución Exenta N° 988, dictada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; la publicación de la Resolución Exenta N° 988 del 24 de marzo de 2017; el acta de “Acuerdo de Prórroga Superintendencia de Servicios Sanitarios y Aguas del Altiplano S.A.”, de fecha 29 de diciembre de 2016; el manual de uso y mantención de la vivienda; el manual del cliente, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; las boletas electrónicas N°s 18622646, 18786738 y 18951713; y las respuestas a oficios que rolan a folios 86 y 95; dan cuenta de los hechos que se afirman, pero no son aptos para desvirtuar lo concluido.

Que la demás prueba rendida no altera lo razonado por lo que no se hará un análisis pormenorizado de ella.

VIGÉSIMO: Que, no se condenará en costas al demandado, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Es por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, 1712, 2314, 2332 y 2515 del Código Civil, 144, 160, 170, 342, 346 y 426 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

En cuanto a las excepciones de prescripción:

I.- Que **SE RECHAZAN** las excepciones de prescripción de las acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

En cuanto al fondo:

II.- Que **SE RECHAZA** la demanda principal de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual en juicio ordinario de mayor cuantía, interpuesta a folio 1 y subsanada a folio 8, por don **CRISTIAN RAMON RAMIREZ ABE** y doña **JEISSY EDITH MATURANA ROMO** en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada por su gerente don Christian Barahona Rubio.

III.- Que **SE ACOGE** la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en juicio ordinario de mayor



cuantía, interpuesta a folio 1 y subsanada a folio 8, por don **CRISTIAN RAMON RAMIREZ ABE** y doña **JEISSY EDITH MATURANA ROMO** en contra de **AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**, representada por su gerente don Christian Barahona Rubio.

IV.- Que, se condena a la demandada, al pago de la suma de \$ 14.000.000(catorce millones de pesos) para don **CRISTIAN RAMON RAMIREZ ABE** y la suma de \$ 14.000.000 (catorce millones de pesos) para doña **JEISSY EDITH MATURANA ROMO**, por concepto de daño moral. Rechazándose la demanda respecto del daño emergente, según se explicó.

V.- Que el monto indicado precedentemente deberá reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo, suma que devengará los intereses corrientes previstos para las operaciones reajustables, los que se calcularán a contar que esta sentencia se encuentre ejecutoriada y para el caso de mora.

VI.- Que, no se condena en costas al demandado, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3546-2022

Dictada por don **HÉCTOR ANDRÉS KOMPATZKI DELARZE**, Juez Titular de este Primer Juzgado de Letras de Iquique.

Iquique, veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, se hizo constar por estado diario la resolución que antecede, dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.



